**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 01/2007**

SERVIDORA PÚBLICA: *****

México, Distrito Federal a de de dos mil diez.

Vistos para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **01/2007**, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Cuaderno de investigaciones.

Mediante oficio SSG/STA/50003/2006 del tres de enero de dos mil siete, el Subsecretario General de Acuerdos remitió a la Contraloría de este Alto Tribunal, entre otras cosas, un escrito de ***** de quince de diciembre de dos mil seis y sus anexos. Mediante dicho escrito, ***** formuló queja o denuncia en contra de ***** , en su carácter de secretaria auxiliar de acuerdos de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, por considerar que en el ejercicio de sus funciones incurrió en conductas que podían llegar a constituir causa de responsabilidad administrativa.

Por proveído de nueve de enero de dos mil siete, el Secretario Ejecutivo de la Contraloría tuvo por recibidos el oficio descrito y sus anexos y toda vez que consideró que con el fin de tener elementos que permitieran presumir la existencia de conductas que pudieran constituir una infracción administrativa, así como la probable responsabilidad de ***** en su comisión, a fin de iniciar, en su caso, el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, determinó iniciar de oficio cuaderno de investigación sobre los hechos denunciados.

SEGUNDO. Inicio de procedimiento. A partir de las investigaciones efectuadas y de las pruebas recabadas, la Contraloría concluyó la existencia de elementos suficientes que acreditan que ***** es probable responsable de la infracción administrativa prevista en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y toda vez que, en términos de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicha infracción está legalmente catalogada como grave, ordenó remitir los autos a Presidencia para que, conforme a lo establecido en los artículos 24, párrafo segundo, y 25, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 9/2005, se emitiera, en su caso, el acuerdo de inicio del procedimiento.

El veintinueve de junio de dos mil nueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de ***** en virtud de que quedó acreditado que, en su calidad de secretaria auxiliar de acuerdos, admitió diversas pruebas testimoniales ofrecidas por la demandada en el conflicto de trabajo 60/2006-J, sin que se hubiera señalado el domicilio de los testigos, en contravención a lo dispuesto en el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, lo que constituye causa de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por dejar de cumplir con la obligación prevista en la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la requirió para que en el plazo de cinco días hábiles rindiera el informe respectivo y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes.

TERCERO. Trámite del procedimiento y emisión del dictamen respectivo. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil nueve se tuvo por rendido el informe presentado por ***** y por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la copia simple que acompañó a su

informe y en relación con la copia del expediente relativo al conflicto de trabajo 60/2006-J, se tuvo por admitida dicha probanza, destacando que yacían en autos algunas copias certificadas de dicho expediente por lo que únicamente se requirieron a la Tercer Integrante y Presidenta de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, las copias certificadas faltantes.

Previos los trámites de ley, mediante proveído del ocho de abril de dos mil diez, se declaró cerrada la instrucción y el veintisiete siguiente, se emitió el dictamen respectivo en el sentido de que existen elementos suficientes para tener por demostrada la causa de responsabilidad administrativa prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por dejar de cumplir con la obligación prevista en el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que propone sancionarla con amonestación privada. Asimismo, se ordenó remitir el expediente relativo a esta Presidencia para los efectos conducentes.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitir resolución definitiva en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en contra de ***** , en tanto se trata de una servidora pública de este Alto Tribunal a la que se le atribuyen conductas infractoras que no están catalogadas como graves.

SEGUNDO. Marco normativo que regula el procedimiento. Ante la falta de regulación expresa en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en el Acuerdo General Plenario 9/2005 del veintiocho de marzo de dos mil cinco, debe aplicarse directamente lo dispuesto en el marco legal que constituye el sistema general de responsabilidades administrativas, que se encuentra previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por tal motivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de este ordenamiento legal y en el artículo 4° del Acuerdo General Plenario en comentario¹, todas las

¹ Acuerdo General Plenario 9/2005

“Artículo 4°. Para la sustanciación y resolución de los procedimientos previstos en este acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su

cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esa ley o en dicho Acuerdo, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles que resulten aplicables.

TERCERO. Formalidades esenciales del procedimiento. Por principio, cabe señalar que del análisis del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa **01/2007**, se advierte que se siguieron las formalidades del procedimiento derivadas de lo previsto en los artículos 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 25, párrafo segundo, 26, 32, 37, 38, 39 y 40 del Acuerdo General Plenario 9/2005, en tanto que:

1. En atención a las conclusiones alcanzadas en el cuaderno de investigación 01/2007, el Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal, el dos de junio de dos mil nueve, emitió opinión en el sentido de que existían elementos suficientes para concluir que ********* incurrió en conductas que pudieran ser de las legalmente catalogadas como graves, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que de conformidad con lo ordenado en el artículo 24, párrafo

caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles (...)."

segundo, y 25, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 9/2005, ordenó remitir los autos a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.

El Ministro Presidente de este Alto Tribunal, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil nueve, determinó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la mencionada servidora pública, por estimar que la conducta que se le atribuye probablemente encuadra en la causa de responsabilidad administrativa prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al dejar de cumplir con la obligación señalada en la fracción XXIV del numeral 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, tomando en cuenta que la falta atribuida no encuadra en las calificadas legalmente como graves, le otorgó un plazo de cinco días hábiles para que rindiera su informe respecto de los hechos que se le imputaron y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa, para lo cual, en respeto a la garantía de audiencia, y como deriva de lo previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le hizo saber la causa de responsabilidad que se le atribuye.

2. Dicho acuerdo se notificó personalmente a la referida servidora pública el veintitrés de septiembre de dos mil nueve.

3. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil nueve se tuvo por rendido el informe solicitado a la servidora pública y por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que exhibió en su defensa.

4. Una vez que el Secretario Ejecutivo de la Contraloría estimó que el expediente se encontraba debidamente integrado declaró cerrada la instrucción, emitió el dictamen correspondiente y lo remitió al señor Ministro Presidente de este Alto Tribunal.

CUARTO. Probable conducta infractora. Del acuerdo del veintinueve de junio de dos mil nueve, por el que el señor Ministro Presidente de este Alto Tribunal inició el presente procedimiento de responsabilidad administrativa se advierte que la falta que se atribuye a *********, secretaria auxiliar de acuerdos de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, se hacen consistir en **dejar de cumplir una disposición legal**, en virtud de que en ejercicio de sus funciones admitió diversas pruebas testimoniales ofrecidas por la demandada en el conflicto de trabajo 60/2006-J, sin que se hubiera

señalado el domicilio de los testigos, con lo que dejó de observar lo dispuesto en el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, así como el criterio sostenido por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en la octava época y lo resuelto por el Pleno de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de revisión promovido en diverso conflicto de trabajo, en el que se estableció que para la admisión de la prueba testimonial es necesario que quien la ofrezca indique los domicilios de los testigos.

La conducta antes descrita probablemente encuadra dentro del supuesto de responsabilidad previsto en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento al deber que impone el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Servidor Público.

QUINTO. Marco normativo relativo a la probable falta cometida. Para estar en aptitud legal de resolver en definitiva si ***** incurrió en alguna causa de responsabilidad administrativa, es menester recordar que de conformidad con lo previsto en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto

en la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es causa de responsabilidad para los servidores públicos de este Alto Tribunal, el no abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

A su vez, es necesario tener presente que en el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo², en relación con la prueba testimonial se establece que quien la ofrece debe cumplir, entre otros requisitos, con el de indicar los nombres y los domicilios de los testigos.

SEXTO. Análisis de la conducta infractora.

Del informe rendido por *********, así como de las pruebas que obran en autos -que más adelante se detallan-, las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene pleno valor probatorio, se

² Ley Federal del Trabajo

“Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes: (...) II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente; (...).”

arriba a la conclusión de que existen elementos suficientes para tener por demostrado que ***** incurrió en actos que implican incumplimiento de una disposición legal relacionada con el servicio público.

En efecto, en primer lugar, se debe tener presente que al momento de incurrir en la conducta que se le atribuye ***** ocupaba el cargo de secretaria auxiliar de acuerdos, rango B, puesto de confianza, adscrita a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, según se desprende de la copia certificada de su nombramiento (fojas 167) **de lo que deriva su carácter de servidora pública de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.**

De la hoja de control de plaza que ocupaba ***** (foja 168) se desprende que las funciones que tenía encomendadas eran: *“Dirigir todas las audiencias que se celebren en los conflictos de trabajo; tomar los acuerdos correspondientes en las propias audiencias; vigilar que dichos acuerdos se cumplan cabalmente; firmar las audiencias que celebre; autorizar los libros de registro que se llevan en la Comisión; levantar las actas de comparecencia de las partes, fuera de las audiencias; certificar las constancias que por acuerdo expreso autoriza el Presidente de la Comisión.”*

Ahora bien, en relación con la conducta que se le atribuye a ***** consistente en **haber incurrido en actos que implican incumplimiento de una disposición legal relacionada con el servicio público**, obra en autos (fojas 320 a 330 del cuaderno de pruebas, primer tomo) copia certificada del acta levantada con motivo de la audiencia celebrada el ocho de noviembre de dos mil seis en el conflicto de trabajo 60/2006-J, de la que se desprende que en relación con las pruebas ofrecidas por la demandada, ***** , en su carácter de secretaria auxiliar de acuerdos, admitió las testimoniales a cargo de ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , señalando en cada caso que la demandada *“se compromete a presentar el día y hora que se señale para el desahogo de la prueba, apercibida que de no hacerlo, se declarará desierto el testimonio de (...) con fundamento en el artículo 815, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.”*

De lo anterior deriva que ***** , en su calidad de secretaria auxiliar de acuerdos de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, admitió las pruebas testimoniales ofrecidas por la demandada, a pesar de que no indicó

el domicilio de los testigos, lo que invariablemente significa que dejó de cumplir con lo dispuesto en el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia, en el que se establece como requisito para quien ofrece la prueba testimonial, señalar el nombre y el domicilio de los testigos.

Sobre el particular resulta de aplicación al caso la jurisprudencia 4ª./J.22 VI/90, de la Cuarta Sala, octava época, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, página 284, cuyos rubro y texto son los siguientes:

“PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. OFRECIMIENTO. El oferente de la prueba testimonial tiene la carga de señalar tanto el domicilio como el nombre de los testigos, independientemente de que se comprometa a presentarlos ante la Junta. La omisión de tales requisitos exigidos por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, trae como consecuencia que se tenga por mal ofrecida esa prueba y que no se admita.”

No pasa inadvertido que ***** al momento de rendir el informe al que se refieren los artículos 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 38 del Acuerdo Plenario 9/2005, argumentó en su defensa que se le dejó en estado de indefensión al notificarle el veintitrés de septiembre de dos mil nueve, el proveído inicial del veintinueve de junio del mismo año, toda vez que dejó de prestar sus servicios en el Alto Tribunal, el treinta y uno de julio de ese mismo año, por lo que en virtud del tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de la queja y la diversa en que se le notificó, cuando ya no tiene acceso a los diversos conflictos en los que intervino, le resulta imposible hacer las precisiones que el caso requiere; no obstante lo anterior, señala que al admitir o desechar las pruebas actuó de la misma manera que en el conflicto 8/2006-J; y aduce que si el recurso de revisión que interpuso la actora en el conflicto de trabajo 60/2006-J resultó fundado, no advierte qué perjuicio puede ocasionarle la admisión de las testimoniales en los términos propuestos.

En relación con lo anterior, debe decirse que, como se precisó en considerandos anteriores, la queja presentada en contra de ***** dio lugar a que el nueve de enero de dos mil siete, la Contraloría de este Alto Tribunal, al advertir que no contaba con

las pruebas suficientes para pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la queja, determinara, conforme a las facultades que se le confieren en los artículos 23 y 26 del Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el diverso 159, fracción XV, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal, iniciar cuaderno de investigación; una vez que culminaron las investigaciones, la Contraloría estimó que había elementos suficientes para iniciar el procedimiento y remitió los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal, en donde, por proveído del veintinueve de junio de dos mil nueve, se acordó su admisión; fue por ello que entre la fecha de presentación de la queja (quince de diciembre dos mil seis) y la notificación del inicio del procedimiento (veintitrés de septiembre de dos mil nueve), transcurrió el tiempo suficiente para que ***** hubiera causado baja, dejando de prestar sus servicios para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ende, para la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación; no obstante lo anterior, no se le dejó en estado de indefensión pues al notificársele el inicio del procedimiento instaurado en su contra, tenía la posibilidad de solicitar, ante la propia Comisión Substanciadora o bien, ante la Contraloría de este Alto Tribunal, todas las facilidades para formular su

defensa, de ahí que no se le dejó en estado de indefensión.

Por otra parte, el resto de sus argumentos resultan ineficaces para acreditar que no incurrió en la causa de responsabilidad que se le atribuye, pues con sus manifestaciones en el sentido de que en relación con la admisión de las testimoniales, actuó de la misma manera que en diverso conflicto, sólo demuestra que no era la primera vez que dejaba de observar una disposición legal y, en cuanto al resultado del recurso intentado por la actora en el conflicto de trabajo 60/2006-J, éste no influye para tener o no por acreditado que incurrió en una conducta u omisión que constituye causa de responsabilidad administrativa, además de que mientras el recurso tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique el proveído recurrido, el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene el propósito de que se sancione a los servidores públicos que incurran en alguna falta administrativa.

Así las cosas, es dable concluir que la conducta desplegada por *****, configura la infracción prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos, pues al quedar demostrado que admitió las testimoniales ofrecidas por la demandada, en contravención a lo dispuesto en el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, es incuestionable que dejó de cumplir con la obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de una disposición legal relacionada con el servicio público.

SÉPTIMO. Sanciones. En virtud de haberse acreditado que ***** no cumplió con la obligación que le impone el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al incurrir en actos u omisiones que implican incumplimiento de una disposición legal relacionada con el servicio público, se procede a individualizar la sanción que le corresponde, considerando para ello los elementos propios de su encargo en la época en que incurrió en dichas infracciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 46 del Acuerdo General 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiocho de marzo de dos mil cinco³, en los siguientes términos.

³ Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

a) Gravedad de la Infracción y conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de la ley o las que se dicten con base en ella. De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,⁴ el incumplimiento de los deberes impuestos en la

“Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos...”

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

*“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren: **I.-** La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; **II.-** Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; **III.-** El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; **IV.-** Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; **V.-** La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y **VI.-** El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. Para los efectos de la Ley, **se considerará reincidente** al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.”*

Acuerdo General Plenario 9/2005

“Artículo 46. Para la individualización de las sanciones antes mencionadas se tomará en cuenta lo dispuesto en los artículos 13, párrafos octavo, penúltimo y último, 14 y 15 de la Ley”.

⁴ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: (...) en todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley...”

fracción XXIV del artículo 8 del último ordenamiento legal en cita, no está tipificado como infracción grave.

b) Circunstancias socioeconómicas del infractor. No es necesario precisarlas, dado que en la especie no se impondrá sanción pecuniaria.

c) Nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, inclusive su antigüedad en el servicio. De su expediente personal, se advierte que en la época en que se verificó la conducta infractora que se le atribuye a *****, ésta tenía la categoría de secretario auxiliar de acuerdos, rango B, puesto de confianza, adscrita a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación y que ingresó a laborar en este Alto Tribunal el veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y siete.

d) Condiciones exteriores y medios de ejecución. De los medios de prueba se advierte que ***** incurrió en actos u omisiones con los que dejó de cumplir lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la admisión de pruebas, circunstancia que no se puede pasar por alto en una servidora pública que realiza una función jurisdiccional como lo es el acordar lo relativo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas que ofrecen las partes con motivo de los conflictos de

trabajo que se promueven ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación.

e) La reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones. De las constancias de autos no se advierte que ***** haya sido sancionada anteriormente por la comisión de una conducta infractora conforme a las disposiciones legales respectivas.

f) El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. En la especie no se tiene noticia de que la conducta que se reprocha a ***** haya ocasionado un daño o un perjuicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni que por virtud de ellas haya obtenido un beneficio o lucro indebido.

En mérito de las consideraciones que anteceden y atendiendo al hecho de que aun cuando la falta en que incurrió ***** no está legalmente catalogada como grave, no se justifica el hecho de que un perito en materia laboral no haya atendido al precepto legal aplicable en cuanto a la admisión de pruebas; en atención a lo dispuesto en el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en

relación con el 45, fracción II,⁵ del Acuerdo General 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impone a ***** como **sanción una amonestación privada**, la que se ejecutará por el titular de la Contraloría quien citará a la ex servidora pública en la sede de la Contraloría, en términos de lo previsto en el artículo 48, fracción I, del Acuerdo General Plenario en comento.⁶

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. ***** es plenamente responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al dejar de cumplir con la obligación señalada en la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por las

⁵ **Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos**

“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: (...) I. Amonestación privada o pública;”

Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

“Artículo 45. Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 2º de este acuerdo, consistirán en: (...) II. Amonestación privada o pública.”

⁶ **Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

“Artículo 48. Para la ejecución de las sanciones previstas en este capítulo, se observarán las siguientes reglas: (...) III. Suspensión del empleo, cargo o comisión y destitución del puesto. El titular de la Contraloría dará aviso a la Dirección de Personal para los efectos legales conducentes. En caso de que el servidor público sancionado no acate la sanción correspondiente, se podrá solicitar auxilio a la Dirección de Seguridad.”

razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución.

SEGUNDO. Se impone a ***** una sanción consistente en **amonestación privada**, en atención a las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo.

TERCERO. Remítase copia de la presente resolución a la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que su titular haga efectiva la sanción precisada y se realicen las anotaciones correspondientes en el registro de servidores públicos sancionados.

Notifíquese personalmente la presente ejecutoria a ***** por conducto de la Contraloría de este Alto Tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el licenciado Luis Grijalva Torrero, Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal que da fe.